



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
Radicación: 05001-31-05-011-2019-0579-01
Demandante: Héctor Dario González Sosa
Demandado: Colpensiones
Asunto: Apelación Sentencia
Procedencia Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
Temas: PENSION ANTICIPADA VEJEZ POR DEFICIENCIA.

Medellín, mayo siete (7) de dos mil veinte (2020)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como Magistrada Ponente, procede, de conformidad con el artículo 15 del decreto legislativo 806 de 2020, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de la parte accionante, respecto a la sentencia proferida el 18 de febrero de 2020, por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor HECTOR DARIO GONZALEZ SOSA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-011-2019-00579-01

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor HECTOR DARIO GONZALEZ SOSA, por conducto de profesional del derecho, instauró ante los Juzgados Laborales del Circuito de Medellín, demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES, pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión anticipada de vejez por invalidez prevista en el parágrafo 4° del artículo 9 de la ley 797 de 2003, a partir del 19 de agosto de 2019, con los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y en subsidio la indexación de las condenas.

Como supuestos fácticos para apoyar las anteriores pretensiones, se indica, en síntesis, que el demandante nació el 16 de agosto de 1964, se encuentra afiliado a Colpensiones y ha cotizado un total de 1.303 semanas, presenta un diagnóstico de enfermedad degenerativa de columna y disco intervertebral e hipoacusia neurosensorial, siendo calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 13 de mayo de 2015, con una pérdida de capacidad laboral del 54.37%, con origen en accidente de trabajo, estructurada el 24 de noviembre de 2016. Agrega que la ARL SURA le concedió la pensión de invalidez de origen profesional en cuantía del salario mínimo legal, a partir del 24 de agosto de 2015; y el 18 de marzo de 2019, solicitó la pensión anticipada de vejez por invalidez, la cual le fue negada mediante Resolución SUB139940 del 31 de mayo de 2019, argumentando que el demandante presenta una deficiencia de origen profesional y no común.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, oportunamente COLPENSIONES responde el escrito impulsor, (01.Expediente.digitalizado.pdf. folios 50 a 56); manifestando que son ciertos los hechos, no obstante, se opone a las pretensiones afirmando que el demandante no reúne los requisitos para acceder a la pensión anticipada de vejez.

Para enervar las pretensiones formula las excepciones de inexistencia de la obligación de pagar pensión anticipada de vejez, sin la acreditación de los requisitos legales; inexistencia de la obligación de reconocer intereses moratorios

del artículo 141 de la ley 100 de 1993; improcedencia de la indexación; prescripción; imposibilidad de condena en costas y compensación.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, puso fin a la primera instancia mediante fallo del día 18 de febrero de 2021, mediante el cual ABSUELVE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES E.I.C.E. de las pretensiones formuladas en su contra por el Señor HECTOR DARIO GONZALEZ SOSA, condenando en costas al demandante.

1.4. RECURSO DE APELACION

El apoderado del promotor del proceso formuló recurso de apelación frente a la sentencia, argumentando que su representado tiene más de 55 años de edad, más de 1000 semanas cotizadas y presenta una deficiencia igual o superior al 50% según el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez emitido el 13 de mayo de 2015.

Asevera que el Despacho incurrió en error al considerar que existe incompatibilidad entre la pensión de vejez y la pensión de invalidez de origen profesional, trayendo a colación la sentencia T205 de 2017, proferida por la Corte Constitucional y las sentencias de la Sala de Casación Laboral SL, 33558 del 2009, SL, 33252 del 23 de febrero de 2010, SL 34820 del 22 de febrero de 2011 y SL 41547 del 12 de marzo de 2014, en las cuales se precisa que es posible reconocer dos pensiones cuando se generan en eventos diferentes, con fuentes de financiación distintas y que amparan riesgos diferentes como la pensión de vejez y la pensión de invalidez de origen profesional. Asegura que en este caso las pensiones no provienen de la misma contingencia, pues para la pensión de invalidez de origen profesional, se debe tener un 50% de pérdida de

capacidad laboral, es suficiente la afiliación, no se exige ningún número de cotizaciones, mientras la de vejez anticipada exige una edad 55 años, un numero de 1000 semanas y una deficiencia del 50% y el legislador no exigió que se trate de una deficiencia de origen común, de ahí que si el legislador no hizo esa distinción no puede hacerla Colpensiones ni la Juez de instancia.

1.5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad procesal para formular alegaciones, se pronunciaron los señores apoderados de las partes. La apoderada del promotor del proceso solicita se proceda a revocar la sentencia de primera instancia pues tal y como se acreditó al interior del plenario, su poderdante cumple todos los requisitos exigidos por la ley para ser titular de ese derecho pensional y debe tenerse presente que la a quo incurre en error al negar la prestación reclamada al demandante, bajo el argumento que la misma es incompatible con la pensión de invalidez profesional que percibe el señor HÉCTOR DARÍO GONZÁLEZ SOSA por parte de la ARL SURA, por provenir de la misma contingencia, dado que en reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas las sentencias con radicado 34820 del 22 de febrero de 2011 y 41620 del 08 de noviembre de 2011, se ha dejado claro que la pensión de invalidez de origen laboral a cargo del sistema de riesgos laborales, es totalmente compatible con la pensión de vejez que reconoce el sistema de pensiones, ya que estas prestaciones las pagan sistemas distintos y se financian por cotizaciones independientes.

La entidad pública accionada por su parte, indica que si bien el demandante en principio cumpliría con los requisitos legales para acceder a la prestación, también es cierto, que de acuerdo a la circular Interna No. 8 de 2014 expedida por Colpensiones y a múltiples pronunciamientos realizados por las altas corporaciones la discapacidad física, psíquica o sensorial que padezca el afiliado debe ser de origen común, excluyendo la posibilidad de que sea de origen

laboral, por cuanto de ser así es la compañía de seguros o de riesgos laborales quien debe proceder a pensionar por invalidez al afiliado o trabajador.

Concluye afirmando que de acuerdo con la prueba documental que reposa en el expediente, el señor Héctor Darío González fue calificado por Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, la cual le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 54.37% estructurada el 17 de agosto de 2012, mediante dictamen No 52881, dicha pérdida de capacidad laboral fue de origen laboral y la compañía de riesgos profesionales lo pensionó por invalidez en el año 2015 y, en el caso en concreto, no se cumple con las disposiciones pertinentes para el reconocimiento de la prestación pretendida, pues solo procede en caso de ser una deficiencia de origen común.

2. CONSIDERACIONES

2.1. COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos resueltos, de conformidad con el art 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS NO DISCUTIDOS EN LA INSTANCIA

Se encuentra que no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos, los cuales se hallan acreditados:

-Que el señor HECTOR DARIO GONZALEZ SOSA nació el 16 de agosto de 1964, cuenta actualmente con 56 años de edad, conforme se acredita con la copia de su cédula de ciudadanía. (folio 11, Expediente Escaneado).

-Que mediante dictamen del 13 de mayo de 2015, la Junta Regional de Calificación de Invalidez, calificó al accionante con una pérdida de capacidad laboral del 54.37%, con deficiencia del 32.72%, estructurada el 17 de agosto de 2012 (folios 14-20, Expediente Escaneado)

-Que el demandante ha cotizado al Sistema General de Pensiones un total de 1302.71 semanas, hasta el 31 de agosto de 2017. (folios 23 a 28 Expediente Escaneado)

-Que mediante Resolución SUB139940 del 31 de mayo de 2019, Colpensiones negó la pensión de vejez al demandante, argumentando que la deficiencia que da lugar a la prestación debe ser de origen común. (folios 41 al 43 Expediente Escaneado)

2.3. PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

El problema jurídico a resolver, conforme a los planteamientos del recurso de apelación lo es establecer:

¿Si el demandante cumple con los requisitos del parágrafo 4º del artículo 9 de la ley 797 de 2003, para el reconocimiento y pago de la pensión anticipada de vejez por deficiencia, determinando si la citada prestación es compatible con la pensión de invalidez de origen profesional?

2.4. TESIS

El problema jurídico se resuelve bajo la tesis según la cual la pensión anticipada de vejez por deficiencia igual o superior al 50%, es compatible con la pensión de invalidez de origen profesional que percibe el demandante, cumpliendo éste con

los requisitos legales, razón por la cual la sentencia debe ser REVOCADA, como se explica:

2.5. FUNDAMENTOS NORMATIVOS

El artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el 33 de la Ley 100 de 1993, establece:

“ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

(...)

PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.

Son tres los requisitos para causar el derecho a la denominada pensión anticipada de vejez por deficiencia i) acreditar el cumplimiento de los 55 años de edad, ii) tener 1000 semanas cotizadas y iii) presentar una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más.

2.6. CASO CONCRETO

En el sublite están acreditados los requisitos antes referenciados, en tanto el demandante cumplió 55 años de edad, el 16 de agosto de 2019, acredita 1302,71, cotizadas en toda su vida laboral y presenta una deficiencia del 32.72 %, según dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Es de anotar, que, respecto a la exigencia normativa relativa a la deficiencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene una línea jurisprudencial pacífica, de acuerdo con la cual la deficiencia del 50% técnicamente corresponde al 25%, así se precisó entre otras, en la sentencia SL 4779 del 10 de noviembre de 2020:

“La deficiencia consiste en toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano.

La norma exige padecer una deficiencia física, síquica o sensorial del 50 % o más; criterio que corresponde a uno de los tres componentes (deficiencia, discapacidad y minusvalía), que conforman la sumatoria para calificar la invalidez y obtener el porcentaje final de pérdida de capacidad laboral.

*Es del caso precisar que, de acuerdo con la **distribución porcentual de los criterios para la calificación total de la invalidez, que establece el artículo 8° del Decreto 917 de 1999**, se le asigna a la deficiencia un porcentaje máximo del 50 %, que en últimas equivale al 100 % de la misma. En ese sentido, basta con que se obtenga un 25 % en la valoración de este componente para entender cumplido el requisito que se establece para acceder a la pensión anticipada de vejez.*

Interpretación que se respalda en el uso de un criterio hermenéutico de especial importancia, como es el principio del efecto útil de las disposiciones jurídicas, pues el texto de una norma debe ser interpretado de manera que todo cuanto ella prescribe produzca consecuencias jurídicas, logrando en la práctica una efectiva protección al derecho allí consagrado y no meramente teórica, pues, en este caso, un entendimiento diferente haría que la norma que consagra esta pensión especial no produzca plenos efectos, ya que no tendría razón de ser cuando hace

referencia a una deficiencia de más del 50 %; además de que se trata una interpretación favorable de la norma.

Debe señalar la Sala que el párrafo 4° del artículo 9 de la ley 797 de 2003, no exige que la deficiencia tenga origen en una enfermedad de origen común, como acertadamente lo argumenta el apoderado recurrente.

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T 462 del 29 de agosto de 2016, reiterando la inconstitucionalidad de la exigencia por parte de las administradoras pensionales:

“Esta Corporación se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre las características y los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para obtener la pensión anticipada de vejez dispuesta en el párrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En particular, en la sentencia T-007 de 2009^[40], reiterada por la T-201 de 2013^[41], la Corte indicó que este tipo de pensión se confundía con la pensión de vejez y con la de invalidez, por lo que consideró necesario realizar la diferenciación entre las 3 prestaciones sociales.

En esa medida, esta Corporación determinó que la pensión anticipada de vejez se diferencia de la ordinaria de vejez, en la medida en que la primera (i) exonera al solicitante de cumplir el requisito de edad dispuesto en el numeral 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, ya que sólo se pide que el solicitante tenga 55 años y (ii) solo exige 1000 semanas de cotización al Sistema de Seguridad Social, a diferencia de la ordinaria de vejez, en la que las semanas irían aumentado hasta llegar a 1300 al año 2015.

Asimismo, en las mismas sentencias este Tribunal estableció que la pensión consagrada en el párrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se diferencia de la pensión de invalidez, en la medida en que esta última requiere del conocimiento del origen de la discapacidad, “en cambio para la pensión anticipada de vejez no es necesario tener conocimiento del origen de la discapacidad—simplemente que su porcentaje supere el cincuenta por ciento-, ni la cotización de un número de semanas antes de la estructuración o del hecho que la originó—sino, el probar que se tienen 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo”^[42]. (Resaltado fuera del texto original).

Posteriormente, en la sentencia T-665 de 2013^[43], la Corte fue más enfática al determinar que para el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez, no es necesario demostrar el origen de la pérdida de capacidad laboral del solicitante, es decir si es común o profesional, toda vez que solo se requiere demostrar que la

discapacidad es igual o superior al 50%, las 1000 semanas de cotización al Sistema General de Seguridad Social y tener más de 55 años de edad.

Lo anterior ha sido reiterado por esta Corporación aún después de que COLPENSIONES profirió la Circular Interna No. 8 del 2014. En efecto, en la sentencia T-128 de 2015^[44], este Tribunal afirmó que “Otro aspecto relevante para distinguir la pensión especial anticipada, de la de invalidez, radica en que en la primera de las prestaciones, el legislador no señaló cuál debía ser el origen de la deficiencia, lo que significa que la misma puede ser consecuencia de cualquier tipo de enfermedad, accidental o voluntaria”. (Subrayado fuera del texto original).

Asimismo, en la sentencia T-326 de 2015^[45] la Corte enfatizó en que la necesidad de determinar si la discapacidad es de origen común o profesional, sólo es exigible para el reconocimiento de la pensión de invalidez, y en consecuencia no es aplicable para la pensión anticipada de vejez.

13. En esta oportunidad, la Sala reitera las reglas jurisprudenciales sobre el alcance del párrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en particular en lo relacionado con las características y requisitos para obtener la pensión anticipada de vejez que establecen que:

- a) Desde el trámite legislativo de la Ley 797 de 2003, el Congreso manifestó su voluntad de crear una prestación social diferente a la pensión de invalidez para proteger los derechos de las personas con discapacidad;*
- b) Los únicos requisitos que se deben exigir al solicitante para el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez son: (i) padecer de una discapacidad igual o superior al 50%; (ii) acreditar 1000 o más semanas de cotización en el Sistema General de Seguridad Social; y (iii) tener más de 55 años de edad.*
- c) No es necesario verificar si la discapacidad es de origen común o profesional para obtener el reconocimiento a la pensión anticipada de vejez.*

En este contexto no es exigible el origen común de la deficiencia y por lo tanto pasa la Sala a determinar si tratándose de una prestación a cargo del Sistema General de Pensiones, la misma resulta compatible con la pensión de invalidez de origen profesional reconocida al demandante por el Sistema de Riesgos Laborales.

Al respecto, es menester señalar que no existe discusión alguna en relación con la compatibilidad entre la pensión de invalidez de origen profesional y la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media con prestación definida, así lo

ha determinado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, posición de la cual da cuenta sentencia del 10 de octubre del 2018, radicado SL 4399 (39972), en la cual se anotó:

...”Sobre la compatibilidad entre las pensiones propias del sistema de riesgos profesionales y las derivadas del sistema de pensiones, cabe resaltar, en primer lugar, que la jurisprudencia de esta Corporación ha venido predicando que ambos beneficios pueden percibirse de manera simultánea, desde que los posibles beneficiarios acrediten las exigencias legales, dado que dichas pensiones mantienen causas, fuentes de financiación, finalidades y regulaciones diferentes, tal como se hizo desde la sentencia CSJ SL, 1 dic. 2009, rad. 33558, que fue retomada en las providencias CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 33265 y, posteriormente, CSJ SL, 13 feb. 2013, rad. 40560.

(...)

Esta posición ha sido reiterada en diversas oportunidades posteriores, como en las providencias CSJ SL12155-2015, SL17477-2017, SL 1764-2018, y CSJ SL, 11 jul. 2018, rad. 55978.

(...)

De igual forma, la Ley 776 de 2002, en el artículo 15, señaló que “Cuando un afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales se invalide o muera como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, además de la pensión de invalidez o de sobrevivientes que deberá reconocerse de conformidad con la presente ley” se reconocerá al afiliado o a sus beneficiarios “a) Si se encuentra afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad la totalidad del saldo de su cuenta individual de ahorro pensional” y “b) Si se encuentra afiliado al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993”.

No obstante, estas normas no pueden entenderse de manera aislada, sino dentro de una lectura sistemática, conjunta y armónica de las disposiciones de la Ley 100 de 1993, puesto que, según los artículos 37 y 66 de esta normatividad, la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos solamente proceden como garantías subsidiarias en caso de no haberse cumplido las exigencias legales para acceder a la pensión de vejez, bien sea en el régimen de prima media o en el de ahorro individual, puesto que, en caso de que un afiliado acredite la totalidad de requisitos, el sistema de pensiones deberá otorgar de manera imperativa la prestación correspondiente al tratarse de un derecho causado y consolidado.

La pensión del párrafo cuarto del artículo 9 de la ley 797 de 2003, ampara el riesgo de vejez, mientras la pensión de invalidez de origen profesional ampara el riesgo de invalidez, cada prestación tiene distinta fuente de financiación, mientras la pensión anticipada por deficiencia, se fundamenta en las semanas cotizadas en el régimen de prima media, que en el caso del demandante corresponden a 1302 semanas, la pensión de invalidez de origen profesional tiene causa en la afiliación y pago de la cotización por parte del empleador.

En este contexto a juicio de la Sala, los lineamientos jurisprudenciales anteriores son aplicables respecto a la pensión especial de vejez anticipada por deficiencia y no solo la pensión general de vejez, en tanto el demandante acredita los requisitos legales para acceder a la prestación y está igualmente justificado el reconocimiento anticipado de la prestación, en virtud del estado de invalidez en que se encuentra el demandante, que lo convierte en un sujeto de especial protección del Estado.

De otra parte, el legislador no incorporó como requisito para las pensiones de vejez e invalidez, la carencia de otras fuentes de ingreso, advirtiéndose, que, en el caso particular, el demandante percibe una prestación del sistema de riesgos profesionales en cuantía de un salario mínimo legal.

Por las razones anteriores la sentencia debe ser REVOCADA, para en su lugar reconocer la prestación.

Monto de la pensión

Conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el actor tiene derecho a que su IBL se liquide con base en la totalidad de las cotizaciones realizadas en su vida laboral o el correspondiente a las cotizaciones de los últimos 10 años, según le sea más favorable, encontrando que el IBL más favorable, corresponde al de los

últimos 10 años que asciende a \$885.678.90, no obstante la tasa de reemplazo es del 64.97% ($65.5\% - (0.5 \times 1.06) = 68.65\%$) que arroja una mesada pensional de \$575.425 para el año 2019, suma inferior al salario mínimo, razón por la cual la prestación debe reconocerse en cuantía del salario mínimo legal.

AÑO	VALOR MESADA	MESADAS	TOTAL
2019	\$ 828.116	14 días y 5 mesadas	\$ 4.527.034
2020	\$ 877-803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	4	\$ 3.634.104
TOTAL			\$ 19.572.577

En consecuencia, deberá condenarse a Colpensiones al pago de un retroactivo por la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (19.572.577), por mesada pensionales causadas entre el 17 de agosto de 2019 y el 30 de abril de 2021.

Procede, igualmente, autorizar a Colpensiones a realizar el descuento de los aportes al sistema de seguridad social, desde la fecha en que el demandante adquiere el status de pensionado.

Intereses moratorios

Procede este juez plural a revisar la pretensión relacionada con los intereses moratorios, advirtiendo que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL 703 de 2013, con ponencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz, flexibilizó el criterio, según el cual, la aplicación de los intereses moratorios del artículo 141 era objetiva:

“La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan

respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir”.

Considerando la Sala que, en el presente caso, procede el reconocimiento de los intereses moratorios, por cuanto no se acredita ninguna razón legal para negar el reconocimiento de la prestación, teniendo en cuenta los pronunciamientos reiterados de la Corte Constitucional en torno a la inaplicabilidad del requisito del origen común de la deficiencia contenido en la circular interna 08 de 2012.

Por consiguiente, debe reconocerse intereses moratorios, los cuales se causan a partir del 22 de diciembre de 2019, cuatro meses después de la fecha de la reclamación de la prestación que lo fue el 21 de agosto de 2019, véase folios 38 del expediente escaneado. Cabe anotar, que, si bien se acredita una primera reclamación el 18 de marzo de 2019, que da lugar a la expedición de la Resolución SUB139940 del 31 de mayo de 2019, no es posible tener en cuenta la misma para contabilizar el plazo legal de respuesta, en tanto el demandante no acreditaba para esa fecha los requisitos normativos, toda vez que los 55 años de edad necesarios para acceder a la prestación los cumplió el 16 de agosto de 2019.

Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones.

3. DECISION

En armonía con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- SE REVOCA la sentencia proferida el 18 de febrero de 2021, por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor HECTOR DARIO GONZALEZ SOSA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y en su lugar:

- a) Se declara que el señor HECTOR DARIO GONZALEZ SOSA, cumple con los requisitos de orden legal para el reconocimiento de la pensión anticipada de vejez por deficiencia igual o superior al 50%, establecida en el párrafo cuarto del artículo 9 de la ley 797 de 2003.
- b) En consecuencia, se condena a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer en favor del demandante la pensión anticipada de vejez por deficiencia igual o superior al 50%, a partir del 17 de agosto de 2019, en cuantía del salario mínimo legal, por 13 mesadas.
- c) Se CONDENA al Colpensiones al pago de un retroactivo equivalente a la suma de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (19.572.577), por mesada pensionales causadas entre el 17 de agosto de 2019 y el 30 de abril de 2021.
- d) Se CONDENA a COLPENSIONES al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, liquidados a partir del 22 de diciembre de 2019 y hasta la fecha del pago de la obligación.
- e) Se autoriza a Colpensiones a realizar el descuento de los aportes al sistema de seguridad social, desde la fecha en que el demandante adquiere el status de pensionado.

2.- COSTAS en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES, en esta instancia, inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$908.526.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

Del fallo anterior quedan las partes notificadas por ESTADOS, de conformidad con el artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No. **79** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 10 de MAYO de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario